

Público - Primer Aniversario - Nuestras banderas
Viernes, 26 de septiembre de 2008

Las contradicciones de la ayuda oficial

Katty Cascante, Coordinadora de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas

No siempre la solidaridad va unida a la coherencia, por mucho que nos empeñemos en utilizar la palabra en todos los discursos y políticas. Hace unos días tuvo lugar en la localidad madrileña de Rivas el Foro Social de Migraciones donde 150 familias acogieron en sus casas a otros tantos participantes, proporcionándoles una estancia y aprovechando la oportunidad para compartir la pluralidad cultural que tanto nos enriquece. Dado el contexto actual, donde la situación de los inmigrantes es mucho peor, la realización del Foro era importante pero el acercamiento entre los ciudadanos resultaba imprescindible para reivindicar la coherencia de nuestras políticas solidarias.

La Directiva europea de retorno, o mas bien las innumerables interpretaciones a la hora de aplicarla, define sin demasiado acierto a las personas que aparentemente no reúnen las condiciones para trabajar y vivir en Europa. Las consecuencias son, en la mayoría de los casos, el retorno al país que les obligó tiempo atrás a dejarlo todo y reinventarse la vida. Esta medida, supone un retroceso en el reconocimiento y ejercicio de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, ya que sin mayor motivo que el azar del lugar de nacimiento, ven como otros condicionan y deciden sobre su futuro. Así que, desde la política se liquida el problema, en vez de buscar una solución global que no se limite a excluir a los sobrantes.

El efecto mas perverso llega de la mano de la cooperación al desarrollo y las distintas políticas de ayuda promovidas desde la Unión Europea, el principal donante (con 56.000 millones de € comprometidos hasta el 2.010) y de cada uno de sus Estados miembros, donde con especial mención destaca España. Y es que nuestro país, en estos cuatro últimos años, ha dado un giro completo a su política de Ayuda Oficial al desarrollo, posicionándose entre los ocho primeros donantes del mundo. No solo se han incrementado los recursos hasta un 0,5% de la RNB (aproximadamente 5.509 millones de €), sino que además se ha impuesto el consenso y dialogo social con todos los actores del desarrollo para gestionar dichos fondos. Se ha impulsado una política multilateral, que ha priorizado el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas y se han apoyado iniciativas como la convocatoria el próximo otoño de la reunión de alto nivel para dar seguimiento a la crisis alimentaria. Y ¿por qué un efecto perverso?, porque desde los mismos países que niegan la oportunidad de un futuro mejor a los emigrantes se registran los mayores flujos de dinero en forma de ayuda al desarrollo. Así, se mantiene un modelo que sigue dejando fuera de juego a dos tercios de la población mundial.

Paradójicamente, la Europa de los Derechos Humanos, exportadora de democracia, libertad e igualdad se muestra generosa cuando la economía necesita mano de obra y muestra su recelo cuando se trata de salvaguardar su estado del bienestar. Lo primero es lo primero y está claro que incluir a los emigrantes en el reparto de este pastel no es conveniente dado los tiempos que corren.

España que impulsó con el respeto de muchos un enfoque diferente, también ha sido víctima de esta contradicción. Tras el respaldo a la Directiva, la esperanza de promover una mayor solidaridad entre los europeos se desvanece. Las puertas de Europa se blindan y parece que nuestro egoísmo deshidrata más que el agua de mar. Tanto para los "siempre hermanos" latinoamericanos como para los africanos con quienes siempre tenemos la deuda moral y un socorrido paternalismo, nuestro proceder ha sido decepcionante. Al mismo tiempo, se sigue canalizando la ayuda al desarrollo hacia estas regiones del mundo con especial interés en aquellos países de origen de la emigración. Y esta medida que en principio pareciera compensatoria, nos plantea el dilema de si las prioridades en nuestra política de cooperación se definen por criterios de quienes necesitan más la ayuda o quienes nos convienen más que se queden en sus países de origen. A veces se da el caso que los países mas empobrecidos no son fruto de tanto interés al no provocar la misma inquietud entre los donantes.

La actual crisis de subida de precios en los alimentos más básicos ha azotado una vez más a los colectivos mas vulnerables, pero lo ha hecho con mayor virulencia en estos mismos países en desarrollo. En situación desesperada, sin alimentos y sin alternativas de supervivencia fuera de sus fronteras, a los 90 millones de personas que dependen del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas sólo les queda aceptar la caridad que le ofrece el Club de Bruselas, mientras escuchan lo solidarios que somos los ciudadanos y ciudadanas de Europa.

España, que ha mostrado su cara mas amable frente a las demandas de organizaciones de la sociedad civil mas concienciada y que tienes indicadores de estar a la altura de los países mas civilizados gracias a las leyes aprobadas sobre deuda externa, regulación de armamento, compromiso en misiones humanitarias y el enorme incremento de las donaciones multilaterales a organismos no financieros, no debería aceptar como suficiente el consenso europeo.

Por ello, desde el gobierno se debería dar un paso al frente y tal como pedía el presidente de CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) ser el primer país europeo en suscribir y ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Esta iniciativa nos llevaría sin duda a una mayor coherencia en nuestra Solidaridad.